

Luis Alejandro Chavez Ibarra (REG)

2024 ER 0085050.

De: HECTOR JULIO RIOS JOVEL <hjrrios103@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 24 de abril de 2024 2:12 p. m.
Para: responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co; Jose.gongora@contraloria.gov.co
Asunto: URFR PRF 044 2019 - RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN -
AUTO 0670 - MUNICIPIO DE VILLAGARZON - JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA
Datos adjuntos: 32 - RECURSO REPOSICION Y APELACION PRUEBAS VILLAGARZON.pdf

Doctor

JAVIER EFRAIN POLO NAVARRO

Contralor Delegado Intersectorial No. 1

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal

Contraloría General de la República

Correo Electrónico: cgr@contraloria.gov.coresponsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co

E. S. D.

Ref. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.: URFR PRF 044 2019
PRESUNTOS RESPONSABLES: JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA Y OTROS.
ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE VILLAGARZON - PUTUMAYO.
ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN CONTRA
EL AUTO No. 670 de fecha 15 de
abril de 2024.

Reciba un cordial y atento saludo:

HECTOR JULIO RIOS JOVEL, Abogado en ejercicio, identificado con C. C. No. 12.125.383 de Neiva y portador de la T. P. No. 191.268 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado de confianza del Ing. JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA, conforme el poder que obra en el expediente; respetuosamente y en oportunidad legal, me permito interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN** contra el AUTO No. 670 de fecha 15 de abril de 2024 - "AUTO QUE DECRETA PRUEBAS EN EL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR PRF 044 2029" (ARTÍCULO SEGUNDO), proferido dentro de la actuación de la referencia, con fundamento en lo siguiente.

HECTOR JULIO RIOS JOVEL
INGENIERO CIVIL U.G.C. – ABOGADO U.C.C.
ESP. EN ADMON DE OBRAS CIVILES -E.A.N.
ESP. CONTRATACIÓN ESTATAL - U.E.C.
ESP. EN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE – U.E.C.
ESP. EN DERECHO ADTIVO Y CONSTITUCIONAL - U.C.C.
ESP. EN PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Doctor

JAVIER EFRAIN POLO NAVARRO

Contralor Delegado Intersectorial No. 1

Grupo Interno de Trabajo Coordinación para la Responsabilidad Fiscal

Contraloría General de la República

Correo Electrónico: cgr@contraloria.gov.co

responsabilidadfiscalcgr@contraloria.gov.co

E. S. D.

Ref. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.: URFR PRF 044 2029

PRESUNTOS RESPONSABLES: JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA Y OTROS.

ENTIDAD AFECTADA: MUNICIPIO DE VILLAGARZON - PUTUMAYO.

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE
APELACIÓN CONTRA EL AUTO No. 670 de fecha 15 de
abril de 2024.

Reciba un cordial y atento saludo:

HECTOR JULIO RIOS JOVEL, Abogado en ejercicio, identificado con C. C. No. 12.125.383 de Neiva y portador de la T. P. No. 191.268 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado de confianza del Ing. JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA, conforme el poder que obra en el expediente; respetuosamente y en oportunidad legal, me permito interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN** contra el AUTO No. 670 de fecha 15 de abril de 2024 - "AUTO QUE DECRETA PRUEBAS EN EL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR PRF 044 2029" (ARTICULO SEGUNDO), proferido dentro de la actuación de la referencia, con fundamento en lo siguiente:

I. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD:

Los motivos de inconformidad con la decisión son los siguientes: a) Fundamento legal "erróneo" para negar la prueba. b) Necesidad de la prueba pedida e imparcialidad de la misma. c) Derecho al Debido Proceso y d) Derecho a la práctica de Pruebas. Procedo a explicarlos:

a) Fundamento legal "erróneo" para negar la prueba

Señala el auto recurrido, que las pruebas peticionadas con relación directa sobre los hechos materia de la presente controversia, no es procedente, pues el despacho considera que conforme las consideraciones expuestas en la

Calle 7 No. 6 - 27 Oficina 10- 03 (Edificio Caja Agraria)
Teléfonos: 608 71 70 57 - Cel. 314 379 00 47 – 314 371 28 89
Correo Electrónico: hjrios103@gmail.com
Neiva – Huila.

HECTOR JULIO RIOS JOVEL

ABOGADO – ESPECIALIZADO

CONTRATACION ESTATAL – DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL
DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE – DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

parte motiva: **1.-** No hay claridad en la solicitud de la prueba documental y **2.-** No hay necesidad de la prueba pericial e imparcialidad de la misma; como quiera, que ya ha sido abarcada con los diferentes Informes Técnicos.

<p>A la postre se negará la práctica probatoria de lo siguiente:</p> <p><i>2.- Si, estas obras son de carácter prioritario para la prestación del servicio de público de acueducto para el Municipio de Villagarzón - putumayo se viene prestando servicio y beneficio social,</i></p> <p>La solicitud probatoria no es clara en su contenido, de tal manera que se negará la petición en este aspecto puntualmente.</p> <p>De la misma manera se negará la solicitud probatoria relacionada con un dictamen pericial, que si bien es cierto aprecia el Despacho la exposición en sede de pertinencia y conducencia, evaluando la necesidad y utilidad de la prueba se encuentra que la misma o su objeto probatorio ya ha sido abarcado por dos informes técnicos dentro de la presente causal fiscal, los cuales han sido puestos a disposición de los sujetos procesales de este proceso para que sea aclarado, complementado y objetado, en esa medida la prueba solicitada no sería necesaria, ni útil de conformidad a su objeto probatorio, pues ya hay dos medios probatorios que cumplen con su objeto.</p>	
--	--

(Visto a Folio 7 AUTO 670 de fecha 15 de abril de 2024)

<p>ARTÍCULO SEGUNDO: NEGAR las siguientes solicitudes probatorias:</p> <p>JUAN CARLOS PATARROYO CORDOBA</p> <p>1. <i>2.- Si, estas obras son de carácter prioritario para la prestación del servicio de público de acueducto para el Municipio de Villagarzón - putumayo se viene prestando servicio y beneficio social,</i></p> <p>2. <i>Dictamen Pericial.</i></p>	
--	--

(Visto a Folio 18 AUTO 670 de fecha 15 de abril de 2024)

Frente a lo apreciado, en el AUTO aquí recurrido, se nos niega el derecho superior a la defensa y contradicción sin ningún sustento de orden legal "legal" violando las garantías legales que la asiste a mi patrocinado, dada la libertad que la normatividad establece sobre la independencia y medios de pruebas en la etapa que se encuentra el proceso, es decir en oportunidad.

Teniendo en cuenta, que el proceso de responsabilidad fiscal, como toda actuación administrativa, debe adelantarse siguiendo los principios del debido proceso y los que rigen el ejercicio de la función fiscal y administrativa (arts. 29, 267 y 209 de la Constitución) como son los de equidad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e **“imparcialidad”** y publicidad. En todo caso las investigaciones administrativas indefinidas riñen con el principio del debido proceso y el derecho de defensa.

Así las cosas, lo peticionado corresponde a tener la oportunidad de ayudar a esclarecer dentro de la oportunidad legal los hechos materia de la presente controversia con elementos probatorios que contengan saneamientos plenos que permitan tener suficientes elementos que accedan realizar un análisis suficientemente objetivo con las reglas establecidas en la valoración del material probatorio que legalmente se haya allegado al proceso de forma integral.

La decisión del órgano del control fiscal **“coarta”** como lo he señalado el poder dar un equilibrio a los elementos que permitan tomar una decisión acorde a los lineamientos que direccionan el proceso.

En ese orden de ideas, y dadas las características de la controversia en cuestión, consideramos de vital importancia que se recurra la decisión y conforme los presupuestos consagrados en el Código General del Proceso se practiquen las pruebas solicitadas, como quiera; que NO es un hecho cierto, como se señala que existe suficiente material probatorio que permita establecer responsabilidades, circunstancia esta que consideramos agravia los intereses de mi poderdante y menos aún, que dichas solicitudes se hayan realizado de forma extemporánea como se puede apreciar.

En ese orden de ideas, tenemos, lo siguiente:

1.- De tal suerte, que considero pertinente “reiterar” y señalar que la petición de la prueba aducida con el DICTAMEN PERICIAL, se realiza con el propósito de confirmar el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas por mi representado, siguiendo lo debidamente expuesto en él en el artículo 226 del C.G.P., norma que dispone que **“Artículo 226. Procedencia:** La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito. No serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 177 y 179 para la prueba de la ley y de la costumbre extranjera. Sin embargo, las partes podrán asesorarse de abogados, cuyos conceptos serán

HECTOR JULIO RIOS JOVEL

ABOGADO – ESPECIALIZADO

CONTRATACION ESTATAL – DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL
DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE – DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

tenidos en cuenta por el juez como alegaciones de ellas. El perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado por la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. El dictamen suscrito por el perito deberá contener, como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones: 1. La identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. 2. La dirección, el número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito. 3. La profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración. Deberán anexarse los documentos idóneos que lo habilitan para su ejercicio, los títulos académicos y los documentos que certifiquen la respectiva experiencia profesional, técnica o artística. 4. La lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere. 5. La lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años. Dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen. 6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen. 7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente. 8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. 9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación. 10. Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen."

Como se observa, la norma en comento se refiere a los presupuestos de la estructuración de un dictamen **"claro, preciso y objetivo e imparcial"**, que le permita al órgano de control fiscal determinar **"causas y origen"** del estado en que se encuentra el contrato de obra pública No. 046 de 2011, esencialmente en lo referente a su funcionamiento, prestación del servicio público de acueducto adecuado y su uso institucional que es del caso que nos ocupa, precaviendo en obtener un **"dictamen"**, que sea completo, integral y útil al proceso, el que debe ser realizado por un profesional externo al órgano de control fiscal especialista en el ramo de la Patología de Construcción y Estructuras, en el que se pueda llegar a la certeza o convicción si hay la existencia del hecho y la culpabilidad del implicado dada que se genera su imparcialidad.

Esto teniendo en cuenta que:

2.- En consecuencia, y en aras de probar los elementos de la responsabilidad o desvirtuarlos si a ello hubiere lugar, se requiere "necesaria e indispensablemente" del peritaje rendido con los lineamientos legales antes transcritos, independientemente de la etapa en que se encuentre el proceso y, además, aunado a lo anterior, para consolidar lo manifestado, se a ello, hay lugar la realización de una nueva CONCEPCION TECNICA IMPARCIAL (DICTAMEN PERICIAL), como lo hemos solicitado, de conformidad con la normatividad señalada.

En cuanto a la prueba Pericial, el H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, ha sido reiterativo, veamos:

"... de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, **la peritación como medio de prueba es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.** El perito debe informarle razonadamente al juez lo que de acuerdo con esos conocimientos especializados sepa de los hechos... Para su eficacia probatoria debe reunir ciertas condiciones de contenido... que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas... El dictamen del perito debe ser claro, preciso y detallado, en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones (numeral 6 del artículo 237 ejusdem)... el juez es autónomo para valorar el dictamen y verificar la lógica de sus fundamentos y resultados, toda vez que el perito es un auxiliar de la justicia, pero él no la imparte ni la administra... En suma, el juez está en el deber de estudiar bajo la sana crítica el dictamen pericial y en la libertad de valorar sus resultados; si lo encuentra ajustado y¹ lo convence, puede tenerlo en cuenta total o parcialmente al momento de fallar; o desechar sensatamente y con razones los resultados de la peritación por encontrar sus fundamentos sin la firmeza, precisión y claridad que deben estar presentes en el dictamen para ilustrar y transmitir el conocimiento de la técnica, ciencia o arte de lo dicho, de suerte que permita al juez otorgarle mérito a esta prueba por llegar a la convicción en relación con los hechos objeto de la misma.

¹ - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, expediente No. 16.491, C.P. Ruth Stella Correa.

En ese orden de ideas, la prueba pedida consagra características de claridad, precisión, exhaustivo y detallado; en él se explicarán: los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones; en el cual se deben relacionar y adjuntar los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen. De tal forma, que lo que se pretende es que se tengan un cumulo (distintos conceptos – criterios profesionales) de elementos probatorios que le permitan al órgano de control fiscal investigador contar con diversas opiniones técnicas que den la mayor claridad ante la decisión que se vaya a proferir.

b) Necesidad de la prueba pedida e imparcialidad de la misma

Sabido es que para que haya un fallo con responsabilidad, debe existir la prueba suficiente que permite verificar la existencia de los elementos que la estructuran, siendo el principal, la existencia del daño.

El rechazo de las pruebas pedidas se fundó entre otras cosas, en su supuesto carácter superfluo, sin embargo, hay que decir que “erra” el operador fiscal, pues, las pruebas pedidas son pertinentes, conducentes y necesarias.

La Corte Constitucional ha señalado que *“La motivación de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posición jurídica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivación consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretación de las disposiciones normativas, de una parte, y determina cómo, a partir de los elementos de convicción aportados al proceso y la hipótesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jurídica aplicable al caso. En el estado constitucional de derecho, la motivación adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las áreas del derecho y la obligación de los jueces y operadores jurídicos de aplicar las reglas legales y/o reglamentarias sólo en la medida en que sean conformes con la Carta Política (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiación, interpretación conforme y carácter normativo de la Constitución) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que dé cuenta del ajuste entre su interpretación y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentación que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales”².*

² - CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-214 de 2012. Referencia: expediente T-3231960. Acción de tutela de Javier Enrique Cáceres Leal contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. Bogotá, D.C., el dieciséis (16) de marzo de dos mil doce (2012).

Pero para llegar a la decisión, el juez, en este caso el operador fiscal, debe apalancarse en pruebas útiles, pertinentes y conducentes. Estos conceptos han sido desarrollados de marras por la jurisprudencia que como fuente de derecho nos ayuda a comprenderlo y a interpretarlo.

Para el Consejo de Estado los principios de la prueba deben estar presentes desde que el Juez considera su decreto, y lo explica de la siguiente manera: *"para determinar si procede el decreto de las pruebas propuestas por las partes, el juez debe analizar si éstas cumplen con los requisitos de pertinencia, conducencia, utilidad y legalidad. Por esencia, la prueba judicial es un acto procesal que permite llevar al juez al convencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia, pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que el hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya demostrado con otro medio probatorio. Finalmente, las pruebas, además de tener estas características, deben estar permitidas por la ley"*³.

Con todo lo expuesto, podemos concluir que es necesaria la práctica de la prueba pedida, teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) El objeto de la prueba es encontrar la verdad. En el presente caso hasta tanto no se dictaminen todos los aspectos técnicos y financieros del contrato, no se logrará el objeto del acervo probatorio en este proceso.
- b) La prueba tiene un carácter reconstructivo, en consecuencia, hasta tanto no se inspeccione la totalidad de los documentos que hacen parte del Contrato de obra pública No. 046 de 2011 y, además, se realice la valoración integral de las obras ejecutadas, no podrán reconstruirse los hechos que motivan esta investigación.

Las pruebas solicitadas (todas) son conducentes porque permitirá esclarecer 1.- Estado actual (real) que presenta el Proyecto, 2.- Su funcionamiento y 3.- Uso Institucional, generando una valoración real e integral de la totalidad de las obras ejecutadas. Es pertinente porque tiene relación con los hechos materia de investigación e interesa a la defensa del implicado. Es útil, porque

³ - CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION CUARTA. Consejero ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS. Bogotá, 19 de agosto de 2010. Radicación número: 25001-23-27-000-2007-00105-02(18093).

HECTOR JULIO RIOS JOVEL

ABOGADO – ESPECIALIZADO

CONTRATACION ESTATAL – DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL
DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE – DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

con ella se puede demostrar jurídica, técnica y financieramente el desarrollo del Contrato de Obra Pública No. 046 de 2011.

VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO” construido mediante contrato de obra Pública No. 046 de 2011 y a quien le corresponde su funcionamiento y operación, 2.- Si, estas obras son de carácter prioritario para la prestación del servicio de público de acueducto para el Municipio de Villagarzón - putumayo se viene prestando servicio y beneficio social, 4.- Como opera técnicamente el sistema de acueducto construido mediante contrato de Obra Pública No. 046 de 2011 -Objeto: CONSTRUCCIÓN DE MACROACUEDUCTO VEREDAL VILLAGARZÓN - LA JOYA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO construido mediante Contrato de Obra Pública No. 046 de 2011.
(DECRETAR)

3.- **DICTAMEN PERICIAL** Se oficie a la SOCIEDAD HUILENSE DE INGENIEROS en su rol de órgano de consulta legalmente constituido para designe un Ingeniero Civil Especialista en Patología de Construcción y Estructuras para que conforme las disposiciones técnicas realicen un examen de todas y cada una de las obras construidas mediante contrato de obra Pública No. 046 de 2011. Es decir, realice un examen de las condiciones estructurales que presentan las obras atendiendo los lineamientos del artículo 226 del CGP determine si se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas para este tipo de obras. (...)

En ese aspecto, es claro que, si miramos la reglamentación probatoria, encontramos que son principios y pilares fundamentales de la actividad probatoria procesal, los relacionados con la LEGALIDAD DE LA PRUEBA, EL DERECHO DE CONTRADICCIÓN, y LA VALORACIÓN DE PLENA PRUEBA, entre otros. De estos sustentos normativos, se desprende por ejemplo la necesidad de practicar dentro del proceso solamente aquellas pruebas que sean **legalmente producidas y allegadas**, (art. 117 Ley 200/95), y además para efectos de su valoración como **PLENA PRUEBA** siempre deberá contarse con el derecho del sindicado, encartado, procesado o afectado a controvertirlas y discutir las, y obviamente a intervenir en ellas.

C) Derecho al Debido Proceso

En este sentido, es preciso manifestar que en ejercicio de lo consagrado en el Artículo 29 de la C. N. debe garantizarse en todo tipo de actuaciones el derecho a la defensa y la contradicción al sujeto procesal en este caso a mi representado; en aras de que se no se presente vulneración a ese derecho fundamental del debido proceso.

Dentro de éste cuadro normativo, el **Derecho al Debido Proceso Administrativo, que incluye el derecho de defensa y contradicción**, es definido como el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos

por parte de la autoridad administrativa, que guarda relación directa o indirecta entre sí, y cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal⁴. El objeto de esta garantía superior es entonces, asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, la validez de sus propias actuaciones y, resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados⁵.

Siendo desarrollo del **principio de legalidad**, el debido proceso administrativo representa un límite jurídico al ejercicio del poder político, en la medida en que las autoridades públicas únicamente podrán actuar dentro de los ámbitos establecidos por el sistema normativo, favoreciendo de esta manera a las personas que acuden ante quienes han sido investidos de atribuciones públicas⁶.

La cobertura del debido proceso se extiende a todo el ejercicio que debe desarrollar la administración pública en la realización de sus objetivos y fines estatales, lo que implica que cubija todas las manifestaciones en cuanto a la formación y ejecución de los actos, a las "peticiones" que presenten los particulares, y a los procesos que adelante la administración con el fin de garantizar la defensa de los ciudadanos⁷.

Ahora bien, Sobre la presunción de inocencia ha dicho la Corte: Sentencia No. C-004/96:

"La presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes con que cuenta todo individuo; para desvirtuarla es necesario demostrar la culpabilidad de la persona con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones"⁸. (Resaltados y Subrayados fuera del texto).

Bajo ese entendido, frente a la decisión adoptada por el operador fiscal, téngase en cuenta, que se violan flagrantemente los Artículos 29 de la norma

⁴ - Sentencia T-522 de 1992.

⁵ - C. Const., Sent. T-525, jul. 11/2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y Sentencia T-1263 de 2001.

⁶ - C. Const., Sent. T-796, sep. 21/2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y Sentencia T-1341 de 2001.

⁷ - C. Const., Sent. C-893, nov. 1º/2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; Corte Constitucional. Sentencia T-1021 del 22 de noviembre de 2002; Sentencia T-571 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

⁸ - Corte Constitucional, Sentencia C-176 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

superior, como el 2 de la Ley 610 de 2000, que preceptúa, lo siguiente: "ARTICULO 2o. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA ACCION FISCAL. En el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo". (El subrayado es Nuestro).

De tal forma, que el AUTO No. 670 de fecha 15 de abril de 2024, aquí recurrido debe ser revocado, en lo referente, a la NEGATIVA DE LAS PRUEBAS AQUÍ SEÑALADAS (ARTICULO SEGUNDO); como quiera, que se requiere la práctica de todas y cada una de las pruebas peticionadas, dada su relevancia, dentro del desarrollo del contrato de Obra Pública No. 046 de 2011, en virtud, a que no es cierto que existan dos (2) INFORMES TECNICOS ya practicados; como quiera, y se han realizado actuaciones al respecto de NO conocer, el contenido técnico del presunto informe rendido por el Doctor EDWARD LEONARDO ROJAS BENAVIDES.

No se conocen los procedimientos técnicos, menos aún, como se derivaron sus conclusiones. De allí, la necesidad de la Prueba.

d) Derecho a la práctica de pruebas

En este aspecto, que la Honorable Corte Constitución ha sido reiterativa y ha consagrado lo siguiente: (sentencia No. T-393/94):

..."La negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas; pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido proceso. El derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra dentro de un proceso disciplinario, constituye un derecho constitucional fundamental, y dado que la declaratoria de inconducencia de una prueba puede conllevar la violación del derecho de defensa y del debido proceso, con innegable perjuicio para el inculpado, el investigador debe proceder con extrema cautela y en caso de duda, optar por la admisión de la prueba. (Resaltados y Subrayados fuera del texto).

Es aquí, donde debe garantizarse el debido proceso como lo señaló esta Corte en la sentencia T - 438/92, se guía por los principios y garantías propias del derecho penal pues tanto en el proceso penal como en el administrativo, se aplican penas como mecanismo de coacción represiva.

En los procesos administrativos como lo es del caso que nos ocupa los derechos al debido proceso y a la defensa se garantizan no sólo por la norma constitucional en cita, sino por los diferentes preceptos legales y reglamentarios que le reconocen al inculpado los siguientes derechos: a solicitar, presentar pruebas, conocer el informe y las pruebas que se alleguen al proceso, a ser notificado de los cargos que se le imputan, a ser oído en la declaración de descargos, a ser representado por un apoderado.

En tal virtud, la negativa a la práctica de pruebas sólo puede obedecer a la circunstancia de que ellas no conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso o que estén legalmente prohibidas o sean ineficaces o versen sobre hechos notoriamente impertinentes o se las considere manifiestamente superfluas; pero a juicio de esta Corte, la impertinencia, inutilidad y extralimitación en la petición de la prueba debe ser objetivamente analizada por el investigador y ser evidente, pues debe tenerse presente que el rechazo de una prueba que legalmente sea conducente constituye una violación del derecho de defensa y del debido proceso.

El derecho de toda persona de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, constituye un derecho constitucional fundamental, y dado que la declaratoria de inconducencia de una prueba puede conllevar la violación del derecho de defensa y del debido proceso, con innegable perjuicio para el inculpado, el investigador debe proceder con extrema cautela y en caso de duda, optar por la admisión de la prueba.

En lo que se refiere a las actuaciones administrativas, éstas deben ser el resultado de un proceso donde quien haga parte del mismo, tenga oportunidad de expresar sus opiniones e igualmente de presentar y solicitar las pruebas que demuestren sus derechos, con la plena observancia de las disposiciones que regulan la materia, respetando en todo caso los términos y etapas procesales descritas.

Lo que para el caso que nos ocupa no ocurrió y, en consecuencia, se debe REVOCAR el auto aquí recurrido específicamente en la negativa de las pruebas señaladas, generando las garantías a las que tienen derecho minipatrocinados.

HECTOR JULIO RIOS JOVEL

ABOGADO – ESPECIALIZADO

CONTRATACION ESTATAL – DERECHO ADMINISTRATIVO Y CONSTITUCIONAL
DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE – DERECHO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

II. SOLICITUD ESPECIAL

Comendidamente, solicito se me informe con la debida anticipación la fecha en que se PRACTICARA LAS PRUEBAS solicitadas y, además, la práctica de todas ya cada una de las pruebas obrantes dentro del presente proceso, para poder participar en las diligencias y ejercer en debida forma como se manifiesta el derecho de defensa y de contradicción de mi representado.

III. PETICIÓN

Respetuosamente solicito se REVOQUE el AUTO No. 670 de fecha 15 de abril de 2024 - "AUTO QUE DECRETA PRUEBAS EN EL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. URFR PRF 044 2029", específicamente en lo relacionado con lo resuelto en el Artículo Segundo; y se conceda en toda su integridad lo peticionado en la oportunidad expuesta dentro de los argumentos de defensa, conforme los lineamientos legales vigentes.

En el evento, de no despacharse favorablemente el Recurso de Reposición interpuesto en debida forma, solicitamos, de forma respetuosa conceder en forma subsidiaria el de Apelación.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lo previsto en la Ley 610 de 2000, en la Ley 1474 de 2011, en la Ley 1437 de 2012, en el Código General del Proceso, en el artículo 29 de la Constitución Política y en las demás disposiciones concordantes.

Atentamente,



HECTOR JULIO RIOS JOVEL

CC. No. 12.125.383 de Neiva – Huila.

T.P. No. 191.268 C.S.J.